

El desempleo y la pobreza

El desempleo y la informalidad son el principal problema que debe enfrentar la administración entrante de Juan Manuel Santos. Por ello, una de las fundamentales propuestas de su gobierno es la de generar, para el próximo cuatrienio, 2,4 millones de empleos y la de formalizar a 500 mil trabajadores, que actualmente laboran en condiciones precarias. La meta es reducir la tasa de desempleo a un dígito, es decir, a un nivel más bajo del 9 por ciento, lo cual significa 3,0 por ciento menos del existente, que se ubica en el 12 por ciento.

De acuerdo a diferentes estudios y proyecciones del gobierno, para alcanzar el objetivo propuesto, se necesita que la economía crezca, de forma sostenida, a tasas superiores al 5.5 por ciento. Para conseguir dicha meta, y así dinamizar la actividad económica, el nuevo gobierno ha propuesto una estrategia basada en cinco sectores básicos: la infraestructura, el agro, la vivienda, la innovación y la minería.

De igual manera, se considera que para incentivar y formalizar la ocupación es conveniente promover las exenciones tributarias para las empresas que generen nuevos puestos de trabajo, en especial para las personas que acceden por primera vez al mercado laboral, ya que el desempleo para jóvenes entre 16 y 25 años es del 35 por ciento, uno de los más alto en América Latina.

Si bien la crisis mundial y las dificultades con Ecuador y Venezuela, dos socios comerciales muy importantes, afectaron la producción y, por ende, la generación de empleo, no se debe olvidar que las políticas implementadas por la actual administración como es la “confianza inversionista”, se orientaron a subsidiar al capital y a desestimular el trabajo formal. Es inaudito, desde una óptica económica, establecer deducciones impositivas del 30 por ciento para las importaciones de bienes de capital, las cuales, de por sí, ya están rebajadas por la considerable revaluación del peso. Además, los estímulos tributarios que el gobierno de Uribe le ha otorgado a las empresas que estén renovando maquinaria y equipo, ubicadas en las zonas francas, ha estimulado la utilización de capital y no se ha traducido en generación de empleo. Asimismo, los contratos de estabilidad jurídica que ha firmado el ejecutivo con algunas de las grandes empresas a veinte años, afectó y afectará los ingresos tributarios del país.

Con semejantes estímulos, es más rentable para los empresarios utilizar capital fijo, en vez de contratar mano de obra, y esa es una de las explicaciones por la que el desempleo afecta a 2.5 millones de colombianos. Si bien el desempleo nacional es alto con todas las repercusiones que ello acarrea, lo más crítico en el mercado laboral colombiano, es la informalidad.

El número de trabajadores en la informalidad laboral, dependiendo de la definición utilizada, se aproxima a los 12 millones, con el agravante de que la informalidad no se redujo durante los años de un gran crecimiento económico como fueron 2005, 2006 y 2007. La población económicamente activa (PEA) es de 21 millones, y en la condición de desempleados y de informales se encuentran 14.5 millones de trabajadores. Es decir, el 68 por ciento o no tienen trabajo o viven del rebusque. No hay que olvidar que Colombia en el contexto de América Latina presenta las tasas más altas de desempleo y de informalidad.

Los altos índices de desempleo y de informalidad contribuyen a explicar la pobreza y la extrema desigualdad imperantes en el país. Colombia, con un coeficiente de Gini de 0.59, es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. En el informe divulgado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), con motivo del Quinto Foro Urbano Mundial, realizado en marzo del presente año en Río de Janeiro, encontró que del total de los ingresos generado en el país, el 49.1 por ciento es acaparado por el 10 por ciento más rico y, apenas, 0.9 por ciento es percibido por los más pobres.

Luis Eudoro Vallejo Zamudio
Editor